



JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
NÚMERO: 0435/2020

ACTORA: \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

AUTORIDADES DEMANDADAS: 1)  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL  
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES y 2)  
SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANÍSTICA,  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REGISTRAL  
Y CATASTRAL DEL ESTADO DE  
AGUASCALIENTES

Aguascalientes, Aguascalientes, dieciocho de diciembre  
de dos mil veinte.

V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de nulidad  
número 0435/2020

RESULTANDO

I. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes  
del Poder Judicial del Estado en fecha veinte de febrero de dos mil veinte,  
remitido a esta Sala al día hábil siguiente, la C. \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* demandó de las autoridades al rubro citadas la  
nulidad del acto administrativo que precisó en los siguientes términos:

2.- RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE  
IMPUGNA:

LA NULIDAD DE LOS CRÉDITOS FISCALES CONSISTENTES EN LA  
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL 2020, LOS CUALES  
ESTAN CONTENIDOS EN LOS ESTADOS DE CUENTA CON NÚMEOS  
DE PREDIAL \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* ,  
\*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , TODOS ELLOS  
EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE  
AGUASCALIENTES, Y QUE EN TOTAL SUMAN UNA CANTIDAD  
TOTAL DE \$109,543.00 (CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA  
Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR EN EL CASO DE LA  
CUENTA PREDIAL NÚMERO \*\*\*\*\* , TAMBIEN SE DEMANDA LA  
NULIDAD DE LOS COBROS REALIZADOS POR LA SECRETARÍA DE  
FINANZAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, RESPECTO DEL  
SUPUESTO CRÉDITO FISCAL, EL CUAL SE CONTIENE EN EL RECIBO  
CON FOLIO \*\*\*\*\* , POR LA CANTIDAD QUE EN EL SE DESCRIBE,  
MISMA QUE SE SOLICITA SU DEVOLUCIÓN POR LA SUSCRITA.

Al efecto, la demandante ofreció en el propio escrito de demanda las pruebas para acreditar su acción.

II. En fecha *nueve de junio de dos mil veinte*, se admitió a trámite la demanda, se recibieron las pruebas ofrecidas y se ordenó emplazar a las autoridades demandadas, requiriéndolas para exhibir la resolución impugnada así como su respectiva constancia de notificación.

III. Por autos de fechas *tres y nueve de julio de dos mil veinte* se recibieron las contestaciones a la demanda, pronunciándose esta sala en relación a las pruebas ofrecidas y se ordenó correr traslado a la parte actora para ampliación de demanda.

IV. Mediante proveído de fecha *quince de septiembre de dos mil veinte*, previa ampliación de demanda y su contestación, se señaló fecha para audiencia de juicio.

V. En audiencia de juicio celebrada el día de hoy, se desahogaron las pruebas admitidas a juicio, se agotó el periodo de alegatos, y se citó el asunto para dictar sentencia definitiva;

#### CONSIDERANDO:

**PRIMERO.- Competencia.** Esta Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, es competente para conocer del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51, párrafo segundo y 52, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 33-A y 33-F, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado y artículos 1º y 2º, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, en virtud de que se impugna una resolución definitiva dictada por autoridad fiscal del Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, que la parte actora afirma le afecta en su esfera jurídica.

**SEGUNDO.- Precisión y existencia del acto impugnado.** Con fundamento en el artículo 60, fracción I, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de



términos de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2020, es decir, el recurso de inconformidad y/o el recurso de revisión previsto en el artículo 1602 del Código Municipal de Aguascalientes.

Es cierto que la parte actora dejó de impugnar a través del recurso ordinario de **inconformidad y/o revisión**, el acto impugnado objeto del presente juicio.

No obstante, tal impugnación, resulta opcional de conformidad al artículo 10 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, que a la letra dice:

*ARTÍCULO 10.- Cuando las leyes o reglamentos de las distintas dependencias administrativas estatales, municipales y de sus órganos descentralizados o de otras personas, establezcan algún recurso o medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo, o bien, intentar desde luego el juicio ante la Sala.*

Luego, al ser opcional el haber agotado, previo al juicio de nulidad, los recursos ordinarios previstos por la legislación que rige la emisión del acto administrativo impugnado, de modo alguno puede entenderse consentido tal acto, siendo inoperante la causal de improcedencia que en éste sentido invocó la autoridad demandada.

Finalmente, es inexacto que al haber pagado el importe de la multa deba entenderse que se conformó con la misma la demandante, según lo expresa la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, como segunda causal de improcedencia, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 26 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes.

Lo cierto es que sólo lo hizo para evitarse mayores problemas con la autoridad municipal como ella misma lo narra en su demanda, y no que hubiere aceptado con el beneficio de dicho pago, el contenido y alcance de la resolución que determinó el importe del crédito fiscal impugnado; siendo aplicable por analogía jurisprudencia en materia administrativa, con número de Registro No. 164615, de la Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de



la Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010, Página: 830, Tesis: 2a./J. 55/2010, misma que resolvió contradicción de tesis 102/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Administrativa del Tercer Circuito y Tercero en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto es el siguiente:

*CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. NO LO ACTUALIZA EL PAGO ANUAL ANTICIPADO DEL IMPUESTO PREDIAL PARA GOZAR DE LA REDUCCIÓN DE UN PORCENTAJE SOBRE SU MONTO.* El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 68/97, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL PAGO LISO Y LLANO DE UNA CONTRIBUCIÓN NO IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA LEY QUE LA ESTABLECE.", sostuvo que si el quejoso presenta demanda de amparo contra una ley tributaria dentro del plazo legal, computado a partir de que realizó el pago de la contribución en forma lisa y llana, tal proceder no constituye una manifestación de voluntad que entrañe el consentimiento de la norma que establece la contribución, pues dada la naturaleza fiscal de ésta, su cumplimiento por parte de los contribuyentes se impone como imperativo y conlleva la advertencia cierta de una coacción, por lo que la promoción del juicio de amparo correspondiente refleja la inconformidad del peticionario de garantías con el contenido de la ley impugnada. Ahora bien, la circunstancia de que algunas leyes fiscales ofrezcan a sus destinatarios alguna reducción en las cantidades a enterar por su pago anticipado, esto es, por cubrirlas con anterioridad a la fecha ordinariamente programada para su recaudación, no implica una inexorable sumisión que torne improcedente el juicio constitucional, ya que al adoptar ese beneficio el sujeto obligado exclusivamente acepta cumplir oportunamente sus cargas fiscales, y esa observancia puntual de la ley no puede sancionarse con la supresión del acceso al juicio de garantías, ya que la sumisión al pago de las contribuciones, sea porque pese sobre el contribuyente la amenaza del cobro coactivo o por el estímulo del beneficio de una disminución que premie su pago anticipado, constituyen dos formas de conminar al sujeto pasivo del tributo para cumplir con sus obligaciones tributarias, de manera que este actúa para evitar sanciones o para obtener adicionalmente disminuciones en sus pagos, pero no por voluntad propia. Consecuentemente, si el juicio de amparo se promueve en tiempo y forma legales, contra el pago anticipado del impuesto predial que el contribuyente se autoliquide, no se configura la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Además, debe entenderse que al haberse formulado en tiempo y forma juicio de nulidad para impugnar la validez de la multa, se entiende que el demandante realizó dicho pago bajo protesto conforme al artículo 48, fracción III, del Código Fiscal del Estado de Aguascalientes que dice:

*Artículo 48.-* Los contribuyentes tendrán derecho a hacer el

*pago de créditos fiscales bajo protesta, cuando se proponga interponer recursos o medios de defensa.*

*El pago así efectuado no implica consentimiento con la resolución o disposición a que se dio cumplimiento, pero extingue el crédito fiscal.*

*El pago bajo protesta, se acreditará en cualquiera de las siguientes formas:*

*I.-...*

*III.- Dentro del término que establezcan las leyes se intentaran los recursos o medios de defensa que procedan, en caso contrario, el pago se tendrá como definitivo;*

*(...).*

Por su parte, la Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes, hace valer la falta de interés legítimo de la parte actora, en virtud de que no acredita afectación alguna a su interés legítimo por parte del Instituto Catastral.

La causal de improcedencia invocada es **INFUNDADA**, porque en el escrito inicial de demanda la parte actora señala expresamente que niega lisa y llanamente conocer de la resolución impugnada y el avalúo catastral, lo que implica todos los elementos que configuran dicha resolución, incluyendo la base que se tomó para el cálculo de los créditos fiscales impugnados, es decir, del avalúo catastral que se tomó como base para su determinación cuya generación corresponde precisamente a la Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral del Estado, por lo que no se actualizan las causales de improcedencia invocadas.

De ahí que no se decrete el sobreseimiento del presente juicio como lo solicitan las autoridades demandadas.

**CUARTO.-** Al no haberse actualizado causal de improcedencia alguna, procede el estudio de los conceptos de nulidad expresados por la parte actora; mismos que no se reproducen en obvio de repeticiones; sin que se haga necesaria su transcripción por no ser un requisito formal de las sentencias.

Del mismo modo, se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias, las defensas opuestas por las



demandadas; sin que puedan ser tomados en cuenta los motivos y fundamentos legales para la emisión del acto impugnado que no hayan sido invocados en éste, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes.

#### QUINTO.- ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD

La actora en su escrito inicial de demanda manifestó que no es de su conocimiento la resolución impugnada, por lo que solicita le sea requerida a las autoridades demandadas a fin de poder formular conceptos de nulidad en ampliación de demanda.

Mediante auto de radicación de demanda esta Sala requirió a las autoridades demandadas la exhibición de las resoluciones impugnadas, así como sus constancias de notificación.

Al contestar la demanda, la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, exhibió la resolución impugnada, misma que ha sido descrita en el considerando SEGUNDO de esta sentencia, en tanto que la Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral del Estado, exhibió los avalúos que supuestamente sirvieron de base para la determinación de las cuentas prediales y ejercicio fiscal de estudio en el presente considerando, siendo omisa en presentar el avalúo relativo a la cuenta predial \*\*\*\*\*, por lo que la parte actora estuvo en aptitud de formular los conceptos de nulidad que estimara pertinentes para desvirtuar la resolución anteriormente descrita.

Así, en primer lugar, los argumentos de estudio resultan FUNDADOS, toda vez que las autoridades demandadas fueron omisas en exhibir la resolución determinante del impuesto impugnado de estudio en el presente considerando con el avalúo catastral que le sirvió de base y ante tal omisión, se concluye que las autoridades fiscales demandadas dejaron en estado de indefensión a la parte accionante —por lo que toca a la cuenta predial \*\*\*\*\*—, esto, porque al no haber exhibido el referido

avalúo, le impidieron que pudiera formular conceptos de nulidad en ampliación de la demanda, **que ataquen el fondo de dicha resolución.**

Es decir, las demandadas hicieron nugatorio el derecho de la parte actora de verter conceptos de nulidad en contra de los actos que dijo desconocer, por lo que, si bien, los actos administrativos tienen una presunción de legalidad de conformidad con el artículo 6º de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes; lo cierto es que la omisión de las autoridades de exhibir las constancias de los actos impugnados, cuando les fueron requeridos por ésta Sala, en virtud de la negativa de la parte actora, destruye dicha presunción de legalidad y en consecuencia **debe darse por sentado que en el fondo**, las autoridades demandadas carecen de elementos para cobrarle la contribución, por lo que debe entenderse que se contravinieron las disposiciones aplicables o dejaron de aplicarse las debidas, **lo cual constituye una violación de fondo**, en términos de lo establecido por el artículo 61, fracción III de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes.

Por otro lado, en cuanto a las cuentas prediales **\*\*\*\*\***, **\*\*\*\*\***, **\*\*\*\*\***, **\*\*\*\*\***, **\*\*\*\*\***, **\*\*\*\*\***, **\*\*\*\*\***, **\*\*\*\*\***, **\*\*\*\*\***, **\*\*\*\*\*** y **\*\*\*\*\***, la actora en su escrito de ampliación de demanda, señaló como SEGUNDO concepto de nulidad esencialmente que la resolución impugnada es ilegal, toda vez que el valor catastral utilizado en la *Determinación del Impuesto a la Propiedad Raíz* por la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes es discordante con el valor catastral establecido en los *avalúos* emitido por el Instituto Catastral.

Son FUNDADOS los conceptos de anulación, toda vez que la demandada Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, no exhibió los avalúos que sirvieron de base para el cálculo y determinación del impuesto impugnado, ya que los exhibidos no coinciden con el valor expresado en su determinación.

Se afirma lo anterior, porque en la *Determinación del*





Impuesto a la Propiedad Raíz de fecha veintisiete de enero de dos mil veinte, relativa al ejercicio fiscal 2020, para las cuentas predial impugnadas:

\*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* y \*\*\*\*\* , se tomó como base un monto que no corresponde al señalado en los avalúos catastrales.

En efecto, en los Avalúos Catastrales emitidos por la Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral del Estado (antes Instituto Catastral del Estado) que obran de foja 40 a la 51 del expediente, se advierte un valor catastral distinto al contenido en la resolución determinante del crédito fiscal impugnado, como a continuación se relaciona:

CUENTA PREDIAL	CUENTA CATASTRAL	VALOR SEÑALADO EN LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE	VALOR SEÑALADO EN EL AVALÚO CATASTRAL
*****	*****	\$1'929,262.00	\$2'158,114.66
*****	*****	\$1'566,562.00	\$1'752,502.72
*****	*****	\$1'603,406.00	\$1'793,605.14
*****	*****	\$946,798.00	\$1'254,229.79
*****	*****	\$1'206,388.00	\$1'598,106.08
*****	*****	\$1'078,208.00	\$1'428,305.44
*****	*****	\$913,954.00	\$1'210,729.66
*****	*****	\$926,568.00	\$1'227,424.66
*****	*****	\$1'076,950.00	\$1'426,640.44
*****	*****	\$1'143,046.00	\$1'514,210.82
*****	*****	\$544,510.00	\$721,307.72
*****	*****	\$937,414.00	\$1'241,809.79

Por tanto, el desconocimiento que adujo tener la parte actora, obligaba a las autoridades demandadas a exhibir la resolución determinante del crédito fiscal impugnado —determinación de impuesto a la propiedad raíz con el avalúo catastral que le sirvió de

base— y su constancia de notificación, *sin que el avalúo exhibido cumpla con tales extremos por no corresponder al valor catastral utilizado para la determinación del impuesto.*

Por lo que al ser omisas en adjuntar los avalúos sustento del cálculo del impuesto a la propiedad raíz ejercicio fiscal **2020** para las cuentas prediales impugnadas violaron lo establecido en el artículo 31, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, que dispone:

*ARTICULO 31.- Cuando se impugne una negativa ficta, el actor tendrá derecho de ampliar la demanda, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acuerdo recaído a la contestación de la misma.*

*También podrá ampliar la demanda, cuando en la contestación se sostenga que el juicio es improcedente, por consentimiento tácito, si el actor considera que la notificación del acto impugnado se practicó de manera ilegal y cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que, sin violar el primer párrafo del Artículo 37, no sean conocidas por el actor al presentar la demanda.*

*Cuando se alegue que el acto administrativo no fue notificado o que lo fue de manera ilegal se estará a lo siguiente:*

*(...)*

*II.- Si el actor manifiesta que no conoce el acto administrativo, así lo expresará en la demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el acto, la notificación de éste o su ejecución. En este caso al contestar la demanda la autoridad acompañará constancia del acto administrativo y de su notificación, mismos que el actor podrá combatir en ampliación de demanda dentro de los quince días siguientes a aquél en que los conozca; y*

*(...).*

[Lo resaltado es propio de la sentencia.]

De lo anterior se advierte, reiterando lo asentado en párrafos anteriores, que *las autoridades demandadas dejaron en estado de indefensión a la parte actora*, toda vez que al no exhibir el documento en el que consta el avalúo catastral que sirvió de base para el cálculo de cada contribución combatida, impidió al demandante la posibilidad de combatir tal resolución en ampliación de demanda.

Es decir, de igual forma que como fue señalado en el estudio de la cuenta predial **\*\*\*\*\***, las demandadas hicieron



nugatorio el derecho de la parte actora de controvertir los actos que dijo desconocer, por lo que, si bien, los actos administrativos tienen una presunción de legalidad de conformidad con el artículo 6º de la Ley del Procedimiento Administrativo; lo cierto es que la omisión de haber exhibido la correspondiente resolución determinante de impuesto predial y el avalúo catastral por parte de las autoridades demandadas, destruye dicha presunción de legalidad y en consecuencia debe darse por sentado que **en el fondo**, las autoridades demandadas carecen de elementos para determinar el crédito fiscal al contribuyente, lo que se traduce en una *contravención a las disposiciones aplicables u omisión en la aplicación de las debidas*, que actualiza la causa de anulación prevista en la fracción III del artículo 61 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, lo cual constituye una **violación de fondo** que provoca la **NULIDAD LISA Y LLANA** de este acto impugnado.

Al haber resultado fundados los conceptos de nulidad en la parte que se analizan, resulta innecesario entrar al estudio de los restantes argumentos expresados por la parte actora, ya que en nada variaría el sentido de la presente resolución cualquiera que fuere el resultado de su examen.

**SEXTO.-** En razón del análisis a que se refiere el Considerando que antecede, al actualizarse la causa de anulación prevista en el artículo 61, fracción III de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes y con fundamento en el diverso numeral 62, fracción II del mismo cuerpo de leyes, lo procedente es declarar la **NULIDAD LISA Y LLANA**, de las Determinaciones del Impuesto a la Propiedad Raíz de fecha *veintisiete de enero de dos mil veinte*, relativas al ejercicio fiscal **2020**, para las cuentas predial impugnadas: **\*\*\*\*\***, **\*\*\*\*\***, **\*\*\*\*\***, **\*\*\*\*\***, **\*\*\*\*\***, **\*\*\*\*\***, **\*\*\*\*\***, **\*\*\*\*\***, **\*\*\*\*\***, **\*\*\*\*\***, **\*\*\*\*\*** y **\*\*\*\*\***.

En consecuencia, y con fundamento en el artículo 63,





Magistrados Enrique Franco Muñoz, Rigoberto Alonso Delgado y Alfonso Román Quiroz, siendo ponente el primero de los nombrados, quienes firman en unión de la Secretaria General de Acuerdos, Licenciada María Hilda Salazar Magallanes, quien autoriza y da fe.

La resolución anterior se publicó en lista de acuerdos de once de enero de dos mil veintiuno. Conste.-

L'EFM/mfpa

La Licenciada María Hilda Salazar Magallanes, Secretaria General de Acuerdos de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, hago constar y certifico que este documento corresponde a una versión pública de la sentencia o resolución 0435/2020 dictada en dieciocho de diciembre de dos mil veinte por la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, constante de siete fojas útiles. Versión pública elaborada de conformidad a lo previsto por los artículos 3o fracciones XII y XXV; 69 y 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como del trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; se suprimieron: el nombre de las partes, el de sus representantes legales, sus domicilios, y demás datos generales, información que se considera legalmente como confidencial o reservada por actualizarse lo señalado en los supuestos normativos en cita, además de lo dispuesto por los artículos 1°, 2° fracción II, 3°, 11, 12 y 99 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. Conste.